

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Francisco Martínez Zamarra y Rosa Elvira Duarte Martínez
DEMANDADA	AFP Protección S.A.
PROCEDENCIA	Juzgado 22 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 022 2018 0475 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 005 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobrevivientes padres que no acreditan dependencia económica
DECISIÓN	Confirma sentencia absolutoria

En la fecha, **veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021)** el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los demandantes contra la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Francisco Martínez Zamarra (Q.E.P.D.) y Rosa Elvira Duarte Martínez,** contra la **AFP Protección S.A..** Radicado único nacional 05001 3105 **022 2018 00475** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto estudiado, discutido y aprobado en sala virtual, mediante acta **Nº. 001,** que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Solicitan los demandantes se declare que les asiste derecho a la pensión de sobrevivientes por el deceso de su hijo Andrés Felipe Duarte Martínez y como consecuencia de ello, se condene a la AFP Protección S.A. al pago de les mesadas retroactivas causadas desde el 10 de agosto de 2014, con las adicionales de junio y diciembre; piden también reconocimiento y pago de intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación de las sumas resultantes. Costas y agencias en derecho.

En sustento de ello afirman que son los progenitores de Andrés Felipe Martínez Duarte, estando este afiliado al RAIS desde el mes de agosto de 2010, falleciendo el 10 de agosto de 2014, contabilizando un total de 127,34 semanas en los tres años anteriores a tal hecho. Que en calidad de padres, no contaban con recursos suficientes para proveerse lo necesario para su subsistencia, y era Andrés Felipe quien les colaboraba económicamente, sin que existan otros beneficiarios de la pensión. Que el 14 de noviembre de 2014, solicitaron a la accionada el reconocimiento de la prestación, negada por no demostrarse dependencia económica **total y absoluta** respecto del occiso.

En auto del 11 de septiembre de 2018 se admitió y ordenó dar trámite a la acción, decisión de la que fue enterada la sociedad accionada, que dentro del término para ello allegó contestación, aceptando el vínculo filial de los demandantes con el fallecido por así estar debidamente acreditado; admite también la afiliación de este al RAIS el 04 de agosto de 2010, precisando que aportó un total de 175 semanas, sin que se pueda determinar que los accionantes sean sus beneficiarios, pues al momento de vinculación no relaciono los mismos y además adelantó investigación administrativa en la que estableció que el señor Francisco Martínez Zamorra sufragaba los gastos propios y los de su cónyuge con la ayuda de los otros hijos. La fecha de fallecimiento del afiliado es cierta, no le constan las circunstancias

personales del grupo familiar. Admite que el fallecido contaba con la densidad de semanas para causar el derecho pensional reclamado por sus progenitores, pero estos no demostraron la dependencia económica exigida para ello. Se **opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló las **excepciones** de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe de la accionada, afectación de la sostenibilidad financiera, compensación, prescripción, y la innominada o genérica.

La primera instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito, en la que declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la accionada denominadas: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido por ausencia de derechos sustantivo y falta de causa, absolvió de las pretensiones formuladas por la señora **Rosa Elvira Duarte Martínez**, quien actúa en su propio nombre y por su calidad de cónyuge sobreviviente, como representante, interesada en la herencia yacente o masa herencial y sucesora procesal respecto de Francisco Martínez Zamorra; condenó en costas a la señora Rosa Elvira, fijando el monto de las agencias en derecho.

Argumentó el fallador que si bien es cierto está acreditado el vínculo filial del occiso con los demandantes en calidad de padres, y tampoco existe discusión sobre los aportes superiores a 50 semanas efectuados a la AFP Protección S.A., dentro de los 3 años anteriores al deceso, con la prueba allegada no queda evidenciada la dependencia económica exigida a los padres para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivencia reclamada, pues la señora Rosa Elvira, manifiesta que su hijo trabajaba en Gana, estudiaba y le aportaba mensualmente \$700.000,00 lo que carece de sustento probatorio al ser los últimos aportes al sistema pensional sobre sumas que en poco sobrepasaban este valor e incluso en los meses de junio y julio registra monto inferior \$616.000,00, y ni en la investigación efectuada por el fondo de pensiones, ni en este trámite judicial quedó

demostrada actividad económica diferente; y aunque afirma también que los estudios se los pagaba la tía Martha que vive en Estados Unidos, de ello no hay prueba; sumado a que la testigo **María Victoria** dice que ella recibía el canon de arrendamiento de la firma Nutibienes, obrando en los autos recibos a nombre de Rubiel, también hijo de los demandantes y hermano del fallecido, a nombre de quien también estaban los servicios públicos; y si bien tal inmueble se restituyó ello no ocurrió en tiempo cercano al óbito. La testigo **Luz Adriana** dice que visitaba a su novio en el sector y Andrés Felipe le comentó que pagaba canon de arrendamiento y servicios, pero no conoció aspectos esenciales de su vida como si estudiaba o no, donde trabajaba, en que se transportaba, sumado a que la señora Rosa Elvira figura como beneficiaria en salud de su hijo Orley, además la señora Rosa tenía auxilio funerario para todo su grupo familiar y queda probado que el señor Francisco recibía ingresos de sus labores en construcción, trabajando para la fecha del deceso de su hijo en una obra con el señor Miguel Antonio Alvarado; la testigo **Lilian** no recordó que pudo haber pasado, y a ello se suma la conducta procesal de la demandante evasiva a las respuestas, lo que se toma como indicio en su contra, luego no queda demostrada la dependencia económica en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional y especializada.

Recurso de apelación

Oportunamente interpuesto por el apoderado de los demandantes, respaldando las explicaciones del juzgado sobre el tema de la dependencia económica, la cual no tiene que ser total y absoluta; sin embargo, para el profesional el juzgador tergiversó el contenido material de las pruebas, haciendo desprender dichos no afirmados, partiendo de máximas de la experiencia no aplicables, pues considera debidamente demostrado que Andrés Felipe contribuía con la suma de \$500.000 para el sostenimiento de sus padres, así se da por sentado por Protección en la investigación administrativa allegada, y si se hacen los cálculos de los gastos mensuales

del grupo familiar este aporte constituía el 50% de los mismos, resultando tal ayuda necesaria e indispensable para la satisfacción de las necesidades básicas de los demandantes, siendo la señora Rosa Elvira ama de casa, partiéndose de una sospecha al recibir esta pensión de sobreviviente desde la fecha de la muerte del señor Francisco, cuando la dependencia económica se debe demostrar al momento del óbito del hijo, no del papá, incurriendo el juzgado en error.

Seguidamente efectúa disertaciones sobre el ánimo de superación de las personas de estratos bajos, quienes también tienen derecho a trabajar y estudiar con limitaciones y contribuyendo a los gastos de su hogar logran sacar adelante carreras técnicas y profesionales, afirmando que en este caso el fallecido era bastión para contribuir con el sostenimiento de sus padres, conviviendo con ellos y con un hermano de crianza como queda demostrado en la investigación administrativa, y aunque existen otros hijos, a medida que adquirieron obligaciones fueron migrando, siendo la labor del señor Francisco en actividades de construcción intermitente, por lo que discrepa de los razonamientos y conclusiones del juez sobre la no dependencia económica, que como se indica en la demanda no debe ser absoluta como se exige por Protección.

Para el profesional, contextualizando el dicho de la señora Rosa Elvira con la investigación administrativa, se puede desprender que para la fecha del deceso de Andrés Felipe sus padres y hermano de crianza de 13 años vivían en la Calle 91 Nro. 50 A 21, apto 011, estrato 3, y una vez ocurre el deceso tuvieron que migrar porque no tenían como solventar sus necesidades y se fueron a un rancho al lado de Tricentenario a la orilla del Río, se pregunta entonces si eso no es dependencia económica, el bajar de estrato y nivel de vida, insistiendo en que el fallecido contribuía con el 50% de los gastos de sus progenitores, aportando el señor Francisco el monto restante, siendo evidente el cambio de condiciones de vida de los demandantes antes y después del fallecimiento de su hijo.

Insiste en que los restantes hijos Juan Guillermo, Orley y Luis Eduardo viven fuera del hogar de sus padres y tiene obligaciones propias, sin que el hecho de ser la señora Rosa Elvira beneficiaria en salud de Orley desnaturalice la dependencia económica de Andrés. También quedó demostrado que Rubiel firmó el contrato de arrendamiento y la suscripción a servicios públicos porque Andrés Felipe no tenía capacidad de endeudamiento, pero se acreditó que era quien sufragaba el arrendamiento y parte de los servicios.

Puntualiza, que a su juicio queda demostrada la dependencia económica de los demandantes respecto de su hijo fallecido y por tanto hay lugar al reconocimiento de la prestación de sobrevivencia reclamada, inicialmente 50% para cada uno, con acrecimiento para la señora Rosa Elvira a partir de la fecha del deceso del señor Francisco, al igual que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso la apoderada de la **AFP Protección S.A.** solicitando la confirmación de la decisión, sustentada en el no cumplimiento por parte de los demandantes de las exigencias de ley, en especial la demostración de dependencia económica respecto de su hijo fallecido como quedo evidenciado con la prueba allegada, citando jurisprudencia especializada que considera aplicable al caso.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados y no debatidos en esta instancia se tienen: el vínculo filial de padres e hijo de los demandantes frente a su hijo Andrés Felipe Martínez Duarte, como se desprende de registro civil de nacimiento; la fecha del fallecimiento de este el **10 de agosto de 2014**, acreditada con documento de similar naturaleza; la afiliación al sistema

pensional Régimen de Ahorro Individual, AFP Protección S.A., con aportes totales por 177.14 semanas de las cuales 127,34 corresponden a los 3 años anteriores al deceso, así se deja consignado en comunicación de fecha 14 de noviembre de 2014, y se infiere de la historia laboral allegada; con ocasión del fallecimiento del afiliado, sus progenitores, hoy demandantes, reclamaron pensión de sobrevivencia, negada por la AFP accionada, con escrito del 14 de noviembre, argumentando que: *de acuerdo con el trámite administrativo adelantado por PROTECCIÓN S.A se constató que los padres no dependía económicamente del fallecido, ya que fue posible comprobar que sin el aporte del afiliado fallecido los padres pueden subsistir sin ser vulnerado su mínimo vital.*

En tales condiciones, el **problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si como se afirma por el recurrente, está demostrada la dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido, no en forma total y absoluta, sino en un nivel determinante para una vida digna como se explica por la jurisprudencia constitucional y especializada, para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes reclamada, o si por el contrario, la razón está de parte de la AFP y del fallador de primer grado. En caso de que haya lugar a ello se estudiara también el punto atinente a los intereses moratorios, indexación y condena en costas.

Teniendo en cuenta la fecha de deceso del afiliado, **10 de agosto de 2014**, para la definición del derecho pretendido se debe observar lo previsto en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, en el cual se establecen los beneficiarios de la prestación, y al no existir discusión sobre el cumplimiento de requisito de semanas, así como la inexistencia de favorecidos con mejor derecho, es viable el reclamo de la prestación sus progenitores, quienes afirman para el efecto dependencia económica.

Es del caso precisar que la **dependencia económica**, no debe identificarse como una sujeción total y absoluta a los ingresos que percibía el causante, de manera que no excluye la existencia de otras rentas o fuentes de recursos propios o provenientes de otras personas, pues no es necesario que el beneficiario se encuentre en estado de mendicidad o indigencia, como se explica por la Corte Constitucional en Sentencia C – 111 de 2006 y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL816-2013, SL 14923 de 2014, SL-6558-2017 y SL4025-2018, entre otras, en las que además se advierte que el hecho de que la dependencia no deba ser total y absoluta, *«...no significa que cualquier estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas»*, pero en todo caso, debe existir un **grado cierto de dependencia**, que se ha identificado a partir de dos **condiciones**: *i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo.*

De lo que se sigue que la *dependencia económica* requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: **i) debe ser cierta y no presunta**; **ii) la participación económica debe ser regular y periódica**; **iii) las contribuciones** que configuran la dependencia deben ser **significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios** de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste.

Así, la **dependencia económica** tiene como rasgo fundamental el hecho que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, **extinguida la relación de**

contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de éste último se ve amenazada en importante nivel, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida -sentencia SL 886-2013-, **situación que como lo explicó el fallador de primer grado, no quedó demostrada en el caso a estudio, por las siguientes razones:**

Oficiosamente se allegó por esta instancia copia de la historia laboral del señor Francisco Martínez Zamarra, en la que registra afiliación a Colpensiones desde el año 1996, con aportes intermitentes en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, los que ante su fallecimiento **ocurrido el 02 de junio de 2019**, le permitieron a la señora Rosa Elvira obtener pensión de sobrevivientes, lo que negó esta al inició de la diligencia de interrogatorio de parte pero aceptó al ponérsele de presente la existencia de nota sobre el particular en el RUAF, sin que ninguna de las versiones allegadas al trámite, esto es, interrogatorio y declaraciones hicieran alusión a la actividad del señor Francisco, y solo al sustentar la apelación el apoderado indica que el fallecido aportaba el 50% de los gastos del hogar el restante 50% el codemandante Francisco.

En la investigación adelantada por la entidad accionada, se estableció que el fallecido estuvo sin empleo durante 8 meses y en el mes de enero de 2014 ingresó a laborar a GANA hasta abril del mismo año en que se enfermó, ocupando el cargo de auxiliar de servicios devengando \$793.500. En esa ocasión la señora Rosa Elvira manifestó que: *Que el afiliado colaboraba con la suma de \$700.000 mensuales, los cuales eran destinados para el pago de arriendo y compra de la alimentación, que el resto lo aporta su esposo cuando se encuentra laborando y muy esporádicamente su hijo ORLEY les colabora con la suma de \$50.000.* Y al pedírsele explicación sobre porque en ocasiones el aporte era superior a los ingresos, respondió que *lo que más le importaba era pagar el arriendo y los servicios porque son deudas que no esperan y que la alimentación trataban de no gastar mucho... Que era muy juicioso, que no tenía deudas con nadie ni tampoco créditos, tampoco tenía novia, que siempre sacaba lo del transporte y el resto*

se lo entregaba a ella, en cuanto a la ropa la obtenía con el dinero que le daban de primas.

El señor Francisco Martínez Zamarra, en la investigación administrativa dijo desempeñarse como auxiliar de construcción, *que el único que ayudaba con los gastos era su hijo ANDRES ya que los demás no pueden porque tienen obligaciones o se encuentran estudiando, que este aportaba una suma de \$700.000 para cubrir los gastos de arrendamiento y alimentación, que el ingreso de él no es mensual, ya que trabaja como auxiliar de construcción y lo llaman por obra, que su salario es de un mínimo.... Que actualmente se encuentra trabajando con un señor de nombre ANTONIO ALVARADO, de quien manifiesta no tener datos de ubicación ni teléfono fijo o móvil.*

Se cuantificaron los gastos del hogar en \$1.080.000 (mercado \$300.000, servicios públicos (energía, gas, acueducto) \$220.000, parabólica e internet \$92.000 y arriendo \$468.00).

En la investigación adelantada por el fondo se obtuvo información de la empresa GANA, indicando que el fallecido ingresó el 20 de enero de 2014, en el cargo de auxiliar de servicios, con un salario de \$793.500, entregándose liquidación final a sus padres por valor de \$730.709; se verificó también la vinculación al sistema de salud de los demandantes, la señora Rosa Elvira a la EPS SALUDCOOP, como beneficiaria de su hijo Orley y el señor Francisco cotizante dependiente desde el 1º de marzo de 2014. También fueron entrevistadas 6 personas con el fin de esclarecer la situación, y se allegó cuenta de servicios públicos del lugar de residencia del grupo familiar, a nombre de Rubiel Francisco Martínez Duarte y también recibo de pago de arrendamiento del 22 de septiembre de 2014, expedido por la empresa Arrendamientos Nutibienes Ltda., a nombre de Rubiel Francisco.

Infructuosos y carentes de sustento probatorio resultan los argumentos expuestos por el recurrente al sustentar la alzada, pues en el trámite judicial, la señora **Rosa Elvira** insiste en que el aporte mensual de su hijo era de \$700.000,00, que se encontraba realizando estudios superiores y se movilizaba en transporte público, sin tener ningún otro ingreso adicional, indicando que el estudio se lo pagaba una tía que vive en Estados Unidos, sin que obre referencia en el trámite o medio de convicción sobre tal aspecto.

La testigo **María Victoria López Giraldo**, propietaria del inmueble que habitaban los demandantes con su hijo fallecido para tal época, y quien para entonces residía en el tercer piso del mismo, afirma que lo entregó en arrendamiento a través de la empresa Nutibienes y que quien pagaba el canon era Andrés Felipe, ***doña Rosa me dijo que Andrés pagaba el arriendo, a mí me pagaba la agencia, me consignaban en el banco, me comentaron que Rubiel era el arrendatario porque el otro era como que menor edad,*** se refiere a Andrés Felipe. Afirma la testigo que *veía a Andrés Felipe entregándole plata a doña Rosa cada mes casualmente, ... nos tocaba ver casualmente, yo veía que le entrega la plata, veía que le contaba 700 mil pesos. Eso veía yo que le contaba Andrés Felipe. Los gastos del hogar no sé. Don Francisco el esposo de doña Rosa sabía de albañilería, eso creo que eran los aportes. No sé de resto que más pasaría con la familia. **Alguna vez me comentaron que Andrés estudiaba o estudio algo pero no sabe que o hasta que año estudió.** A la fecha de la muerte Andrés trabajaba no sabe dónde, pero trabajaba. **Los otros hijos de doña Rosa y Francisco** sabe que venían a visitarlos, pero no les conoció nada de la vida. No sabe si le aportaban a madre y padre para los gastos del hogar. No sabe cuánto ganaba Andrés. En el inmueble vivían los demandantes, el fallecido y un hijo de crianza de nombre Daniel, menor de edad. Veía a Andrés llegar en una motico pero no sabe si era de él y en cuanto a Francisco dice que laboraba en albañilería, remienditos que le resultaran.*

La declarante **María Lilia López Giraldo**, manifestó que conoció a Andrés Felipe porque vivía en uno de los apartamento del edificio que habitaba,

alquilado a uno de los hijos de doña Rosa, en el vivían los demandantes y sus hijos, los otros hijos también vivían, los veía que entraban y salían pero no los conoció bien, sus nombres son Rubiel, Orley, **y en ese momento de la declaración ante manifestaciones y gestos de la señora Rosa Elvira quien se encontraba presente en el mismo lugar en que estaban las declarantes,** la testigo olvidó su versión y así lo manifestó al indicar a los distintos interrogantes no recordar por haber transcurrido mucho tiempo.

Luz Adriana Velásquez Ramírez, conoció a los demandantes y al fallecido porque iba al sector a visitar a su novio, y explica que Andrés vivía en un primer piso, y actualmente ella ocupa el segundo. *Andrés vivía con la mamá, el papá y el hermano menor, Daniel. Era hermano de crianza. Vivían en casa alquilada. No sé quién tomo la casa pero sé que pagaban 460.000 porque en algunas ocasiones me lo mencionaron. En su momento Andrés Felipe me lo mencionó. Los Gastos del hogar no los sabe, pero afirma que Andrés Felipe veía por ellos en su totalidad, manifestado por la señora Rosa y Andrés Felipe. No tenían más quien les ayudara. Sobre los servicios públicos dice que en un momento Andrés Felipe me manifestó que el los pagaba. Andrés me contaba esto no había motivo específico, pero conversábamos en la puerta de la casa de él. Los otros hermanos no vivían con él y hasta donde tiene entendido no participaban de los gastos del hogar. Conoció al papa de Andrés, don Francisco, la mayoría de las veces trabajador informal pero no tenía un trabajo estable. Doña Rosa no tenía actividad comercial, 100% ama de casa.*

Después de la muerte de Andrés *doña Rosa continuó viviendo en ese sitio, después de determinado tiempo se mudó, tengo entendido por el tema económico a pagar un monto menor. ... Andrés no tenía pareja ni hijos, él no tenía vehículos para transportarse. No recuerda en que trabajaba. Utilizaba transporte público. No se percató de que utilizara motocicleta. No tiene conocimiento que Andrés Felipe estudiara o que hubiere estudiado posterior al bachillerato... no tiene conocimiento cuanto devengaba Andrés. **Sabía que pagaba todo porque él y doña Rosa decían.** Específicamente no lo vio pagando arriendo, servicios o mercado.*

Son evidentes las contradicciones de las deponentes, máxime cuando las dos primeras vivían en el tercero piso del edificio de su propiedad, estando el primer piso rentado al grupo familiar de los demandantes, pues mientras la señora María Victoria López expone una versión absolutamente coincidente con la de la señora Rosa Elvira, indicando que en el sitio vivía la pareja demandante, el occiso y el hermano de crianza menor de edad, y que Andrés Felipe aportaba mensualmente \$700.000 y casualmente ella lo veía, son estos los únicos aspectos en los que insiste a lo largo de la versión, sin dar mayores explicaciones del porque el inmueble en la agencia lo tomó otro de los hermanos, las actividades desempeñadas por el señor Francisco, la existencia de otros hermanos dentro del grupo familiar, aspecto al que espontáneamente hace referencia la señora María Lilia López Giraldo hermana de la anterior, residente en el mismo lugar, cuando dijo que en el inmueble además de los demandantes y Andrés Felipe, también residían los otros hijos de la pareja Rubiel y Orley, y ante gestos y expresiones de la demandante, olvidó su versión, atribuyendo tal situación al tiempo transcurrido, y la testigo Luz Adriana Velásquez, dice saber que Andrés Felipe era el sustento de los demandantes, porque él y la señora Rosa se lo contaban, siendo este el único dato del que tiene certeza, pues nada distinto conoce de la vida del fallecido, luego no existe medio de convicción que permita establecer cuál era el verdadero aporte suministrado por el occiso a sus progenitores, máxime cuando llevaba 8 meses sin trabajar y en de enero de 2014 se vinculó a la empresa GANA, devengando una suma ligeramente superior a \$700.000,00, y a pesar de la claridad del abogado sobre el tema de la dependencia económica para ser beneficiarios los padres de la pensión de sobreviviente, **la que en manera alguna tiene que ser total y absoluta, como se explicó por el a quo y lo tiene definido la jurisprudencia constitucional y especializada, quiso infructuosamente hacer ver que todo lo percibido por Andrés Felipe era entregado a sus progenitores, ocultando la ayuda de los restantes hijos y el aporte de su padre a los gastos del hogar, pues demostrado queda el desempeño de actividades como trabajador**

dependiente, cotizando al sistema pensional, ingresos que ocultan la señora Rosa y las deponentes en el trámite judicial, sin que sea posible como lo pretende al sustentar el recurso modificar los dichos de los declarantes y versión de la propia demandante, al indicar que lo entregado era \$700.000,00 para concluir que en realidad eran \$500.000, cifra a la que ni siquiera se alude, y así derivar aporte del 50% como lo afirma el togado sin sustento probatorio alguno, debiéndose tener en cuenta además que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye el derecho de estos a obtener una pensión de sobrevivientes, la única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas (CSJ SL 31346, feb. 12/2008, reiterada en la CSJ SL2800-2014, CSJ SL6558-2017, CSJ SL2587-2019 y la SL519-2020).

Luego, atendiendo las reglas de la sana crítica previstas en el artículo 61 del C. P. T. y de la S.S., la prueba aportada analizada en su conjunto y la conducta procesal de la demandante Rosa Elvira Duarte, no permiten desvirtuar las conclusiones a las que arribaron la AFP en su investigación interna, las que fueron respaldadas por el fallador de primer grado, por lo que se impone confirmar la decisión revisada.

Costas a cargo de la parte recurrente a quien resulta adverso el recurso, las agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526,00.

En mérito de lo expuesto, **la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por **Francisco Martínez**

Zamarra (Q.E.P.D.) y Rosa Elvira Duarte Martínez, contra la AFP Protección S.A..

Costas a cargo de la parte recurrente a quien resulta adverso el recurso y a favor de la sociedad demandada, las agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el 15 del Decreto 806 de 2020.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 011** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín **26 de noviembre de 2020**

Secretario